

Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

ENERO-DICIEMBRE 2021 • INFORME PRELIMINAR

ESPACIO PÚBLICO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57 y 58 garantiza el derecho a la información y comunicación de los ciudadanos. Este derecho se hace efectivo en el ejercicio libre y plural de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de la libertad de comunicación por cualquier medio de comunicación y difusión. Sin embargo, año tras año, desde que la revista viene publicando el Informe sobre Libertad de Expresión, este derecho se ha visto y se ve vulnerado por diversas razones de índole política y por medidas jurídicas arbitrarias. El año 2021 no ha sido la excepción.

En este nuevo informe se contemplan tres capítulos desde los cuales se analiza cómo ha sido el comportamiento del derecho a la libertad de expresión en nuestro país: impedimentos de cobertura y difusión, censuras y restricciones administrativas y víctimas y victimarios. En síntesis, Espacio Público, autor del informe, nos dice a modo de conclusión que: “Se registra un descenso en el número total de casos, por segundo año consecutivo, en un periodo caracterizado por la reducción de la agenda noticiosa. Sin embargo se mantuvieron patrones recientes que se alejan de prácticas garantistas en materia de derechos humanos”.

Luego de un segundo año en cuarentena, tras la declaración de emergencia por la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, la opacidad informativa y las posibles represalias por la difusión de información generaron un clima de inhibición en medios de comunicación y periodistas. Las medidas implementadas por el Estado venezolano para enfrentar la pandemia vulneraron de forma directa el derecho a la libertad de expresión. En tal sentido, muchas personas sufrieron represalias luego de cuestionar a funcionarios y políticas públicas a través de sus redes sociales¹.

Registramos un descenso en el número total de casos, por segundo año consecutivo, en un periodo caracterizado por la reducción de la agenda noticiosa. En paralelo, el conflicto político permaneció estancado, a pesar de los altos niveles de conflictividad social.

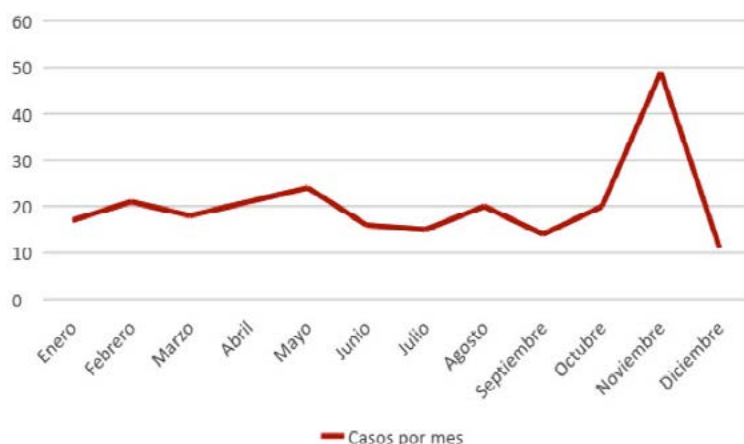
El 2021 fue el año con menos cantidad de casos desde el 2015, cuando se registraron 237. Durante el último periodo se documentaron al menos 246 casos², lo cual constituye una disminución del 37 % con relación al número del año 2020, cuando se contabilizaron 390 situaciones de violación a la libertad de expresión.

DOCUMENTO

CUADRO 1. CASOS POR AÑO

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
138	110	141	121	106	126	120	246	159	139
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
169	220	350	237	266	708	387	468	390	246

GRÁFICO 1 CASOS POR MES



La ocurrencia de casos mantuvo un comportamiento lineal durante todo el año, salvo en el mes de noviembre, cuando se registraron 49 situaciones. Este incremento estuvo motivado principalmente por las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el marco del proceso electoral del 21 de noviembre, donde se renovaron las alcaldías y gobernaciones a nivel nacional. Durante la mencionada jornada se contabilizaron no menos de 27 casos y 57 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión³, siendo así uno de los procesos electorales con más incidencias durante los últimos años.

Febrero (21), abril (21) y mayo (24) completan la lista de los meses con mayor número de casos, mientras que diciembre (11) se ubicó como el mes en que se registró el menor número de incidencias.

En el último año, del total de casos registrados se derivaron al menos 471 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 51 % con relación a las registradas durante el año anterior⁴. Esta es la cifra más baja documentada en los últimos cinco años.

IMPEDIMENTOS DE COBERTURA Y DIFUSIÓN

Las intimidaciones fueron las incidencias más recurrentes; comprendieron 161 (34 %) del total de violaciones registradas. Los periodistas y reporteros fueron quienes más se vieron afectados por esta situación, constituyeron el 70 % de las víctimas de intimidación. Los impedimentos de cobertura a equipos reporteriles por parte de funcionarios públicos y efectivos de seguridad fueron una constante y se ubicaron nuevamente como las restricciones más frecuentes. La mayoría de estas situaciones se suscitaron en medio de la cobertura de protestas ciudadanas, en estaciones de servicio,⁵ y en centros de salud.

- El 24 de mayo, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intimidó a los periodistas Edwin Prieto de *Todos Ahora*, y a Madelyn Palmar de *Unión Radio*⁶, cuando intentaban cubrir una protesta del movimiento estudiantil en la avenida La Limpia. Durante el hecho, un funcionario impidió a ambos reporteros que hicieran la cobertura y

CUADRO 2.
VIOLACIONES SEGÚN TIPO

VIOLACIONES POR TIPO	TOTAL	%
Intimidación	161	34,18
Censura	144	30,57
Restricción administrativa	51	10,83
Hostigamiento verbal	38	8,07
Amenaza	34	7,22
Hostigamiento judicial	27	5,73
Ataque	10	2,12
Agresión	6	1,27
Total general	471	100

amenazó a Prieto con quitarle sus equipos si continuaba grabando. “¿Tú quieres que yo te retenga los equipos esos? Te estoy diciendo que dejes de grabar porque estás alborotando la cosa” le espetó el efectivo, a lo que Prieto le respondió: “¡No puedo dejar de grabar porque estoy haciendo mi trabajo. Yo no soy el de la protesta, soy un periodista que solo está cubriendo la noticia, la información. Más nada”.

- El corresponsal de *Caraota Digital*, Miguel Da Silva⁷, fue hostigado verbalmente, amenazado e intimidado por la directora del Hospital Pérez de León, Zayra Medina, mientras realizaba unas entrevistas en el centro de salud. Da Silva estaba en el sitio para tomar testimonios a los familiares de una persona que había sido arrollada junto a otras dos días antes en la avenida Sucre de Catia, tras ser impactadas por un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. “Al llegar al Hospital Pérez de León, la puerta estaba abierta, entré y ubiqué a los familiares de Keiber, mientras conversaba con ellos llegó la directora del hospital, quien en una actitud hostil y violenta me comentó que no podía grabar, que yo era un amarillista, que yo no podía estar en el hospital; me amenazó con llamar a una fiscal, me dijo que yo podía estar detenido, en reiteradas oportunidades”, declaró Miguel Da Silva en entrevista a Espacio Público. Medina le negó la oportunidad de retirarse del hospital y le ordenó al personal de vigilancia que lo mantuviera encerrado en donde se encontraba, esto a pesar de que Da Silva mostró su deseo de irse del lugar: “[...] después de unos minutos, conversé con ella más calmada y me dijo que me podía ir, pero que para la próxima yo necesitaba un permiso para grabar en un ente público porque fui a invadir a una instancia del Estado”.
- En medio del proceso electoral del 21 de noviembre, funcionarios del Plan República le impidieron al equipo de *Palpitar Trujillano*⁸, integrado por Oranyelis Vargas, Romina Uzategui, Martha Moreno y José Barrueta, grabar en las afueras del centro de

CUADRO 3.
DETENCIONES POR OCUPACIÓN

DETENCIÓN POR OCUPACIÓN	TOTAL	%
Periodista / reportero	13	37,14
Particular	9	25,71
ONG / miembro	6	17,14
Trabajador público	4	11,43
Conductor	1	2,86
Reportero gráfico	1	2,86
Trabajador de la salud	1	2,86
Total general	35	100

Las intimidaciones fueron las incidencias más recurrentes; comprendieron 161 (34 %) del total de violaciones registradas. Los periodistas y reporteros fueron quienes más se vieron afectados por esta situación, constituyeron el 70 % de las víctimas de intimidación.

votación Liceo Bolivariano Ignacio Carrasquero, ubicado en el estado Trujillo.

En el 2021, al menos 35 personas fueron detenidas por buscar, recibir o difundir información, lo cual representa una disminución en el número de detenciones del 68 %, con relación al 2020⁹. Del total de personas detenidas los periodistas (37 %), particulares (25 %) y miembros de ONG (17 %), fueron los más afectados. Diez de las detenciones fueron por la difusión de información o contenidos en línea; al menos tres estuvieron vinculadas a WhatsApp y dos a TikTok.

- El 28 de febrero, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a José Pérez, por la publicación de un video en la red social TikTok. En el material visual, el tiktoker cuestionó los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de este con el chavismo. Pérez fue contactado vía telefónica por la esposa del cantante, María Buitrago, quién además de comentarle su molestia lo

DOCUMENTO

amenazó con que “estará manchadito de rojo”. A pesar de que Pérez se disculpó con la familia y retiró el video, una comisión del cuerpo policial, comandada por el inspector Alberto Dugarte, jefe de delitos informáticos del Cicpc sede Urdaneta, lo detuvo sin una orden judicial. Tras veinte días detenido, el Tribunal dictó medidas cautelares entre las que están: prohibición a Pérez de hablar públicamente sobre su caso, prohibición de salida del país, régimen de presentación cada quince días.

- El director general de Fundaredes, Javier Tarazona¹⁰, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 2 de julio, cuando acudió a la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón y otros sujetos sin identificar. Junto a él también están detenidos Rafael Tarazona y Omar García, activistas de Fundaredes, y Jhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas Venezolanas (Mayday Confavidf); este último fue liberado horas después de la detención. En palabras de Tarek Willam Saab, la detención de los activistas se debió a que estos “realizaron acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República”. Durante el 26 de octubre fueron excarcelados Omar de Dios García y Rafael Tarazona, tras permanecer detenidos 117 días.
- La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo al fotógrafo Carlos Germán Debais García¹¹ en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón, el 12 de noviembre, por sobrevolar un dron que aparentemente rodeó las instalaciones de la refinería Amuay. Luego de su detención allanaron su vivienda y se llevaron varios equipos electrónicos. “A eso de las 3 de la tarde fue el último mensaje que recibí, me dijo que estaba en Judibana. Él tenía que buscar a una tía a eso de las 4 p.m., nunca llegó. A partir de ahí nos comenzamos a preocupar y

empezamos a llamarlo. Y no fue sino hasta las 10 de la noche que llegaron cuatro camionetas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con aproximadamente veinte funcionarios. Ingresaron a la casa y se llevaron computadoras, memorias, herramientas, el celular de mi primo; se llevaron una cantidad de cosas que no nos daba tiempo de ver que estaban agarrando”, declaró Gabriela Galicia, prima del detenido a Espacio Público.

CENSURAS Y RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS

A pesar de la disminución del ecosistema de medios de comunicación durante los últimos años, producto de las medidas y políticas arbitrarias, los cierres de medios y las limitaciones de acceso a la información se mantienen. Del total de violaciones, la censura sumó al menos 144 registros (31 %), mientras que se contabilizaron al menos 51 restricciones administrativas (11 %). Durante el 2021 se registró el cierre de nueve emisoras de radio, un medio digital y un medio impreso. Con esta cifra suman al menos 292 medios cerrados desde el 2004. Algunos se destacan a continuación:

- El 8 de enero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) realizaron un operativo en las sedes de *Venezolanos por la Información (VPITV)*¹², en Caracas. Aproximadamente trece funcionarios de ambos entes, visitaron la sede del medio ubicada en la urbanización Los Dos Caminos y luego acudieron a La Florida. Durante ambas visitas mantuvieron detenidos a los trabajadores que se encontraban en el lugar. “Sin presentar orden por escrito, están inspeccionando las instalaciones, interrogando al personal, solicitando documentos e información operativa y administrativa. Incluso solicitaron claves de los procesos de transmisión y además revisaron correos electrónicos relacionados a la operación de VPITV”, explicaron en un comunicado. Luego

de realizar un inventario, los funcionarios cargaron con equipos de transmisión, cámaras, computadoras y otros equipos necesarios para continuar con la labor informativa.

- Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se presentaron en las instalaciones de la emisora *Radio Selecta 102.7 FM* en la ciudad de Machiques, estado Zulia, el 5 de marzo, y confiscaron los equipos de transmisión dejando la emisora fuera del aire. Conatel cargó con dos computadoras, tres micrófonos AT 2020, un procesador de sonido y un transmisor de la estación que tenía trece años de labor ininterrumpida. Este hecho ocurrió una semana después de que *Radio Selecta* fuese atacada por un grupo de indígenas Yukpas presuntamente bajo la orden de la alcaldesa Betty de Zuleta, cuando se llevaba a cabo una entrevista a los dirigentes políticos Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconiz y Julio Montoya.

Dentro de estas violaciones se ubican las limitaciones generadas por las constantes fallas del servicio eléctrico y de Internet. En tal sentido, documentamos al menos treinta violaciones al derecho, lo cual da cuenta del estado de los servicios públicos en el país, producto de la desinversión y las carencias de infraestructura.

- Fallas eléctricas dejaron fuera del aire, durante cuarenta minutos, a más de treinta emisoras del estado Mérida¹³ el 4 de junio, dejando a los pobladores sin acceso a la transmisión habitual de su programación.
- El 4 de octubre el observatorio de Internet, Ve Sin Filtro, informó que el estado Apure estuvo sin acceso a la red por un apagón en la región. La conexión en la entidad se ubicó en 19 % de sus valores habituales. Del mismo modo, los estados Nueva Esparta y Táchira se vieron afectados, y sus valores de conectividad cayeron al 35 % y 65 % respectivamente¹⁴.

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

Al igual que en periodos anteriores, las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, fueron los

CUADRO 4.
VÍCTIMAS POR OCUPACIÓN

VÍCTIMA POR OCUPACIÓN	TOTAL	%
Periodista/reportero	131	43,52
Medio de comunicación	64	21,26
Ciudadanía en general	31	10,30
Particular	18	5,98
ONG/miembro	17	5,65
Trabajador público	14	4,65
Página/plataforma web	9	2,99
Reportero gráfico	8	2,66
Camarógrafo/técnico	4	1,33
Conductor	2	0,66
Trabajador de la salud	2	0,66
Desconocido	1	0,33
Total general	301	100

periodistas y reporteros, quienes alcanzaron un total de 131 (44 %) registros. En segundo lugar se ubican los medios de comunicación con 64 víctimas (21 %), seguidos por la ciudadanía en general, que fue víctima en al menos 31 ocasiones (10 %). Con respecto al género de las víctimas, el 69 % de estas fueron masculinas, mientras el 31 % restante corresponde al género femenino.

En el caso de las violaciones hacia periodistas, en su mayoría estuvieron basadas en impedimentos de coberturas o prohibición de acceso a recintos como centros de votación, hospitales y estaciones de servicio. Sin embargo, también fueron víctimas de hostigamientos verbales de parte de funcionarios del Estado y amenazas de miembros de cuerpos de seguridad.

- El concejal del municipio Carrizal, Yenderth Alcalá, ordenó a la Policía de Carrizal que sacara al reportero gráfico de *El Liberal Post* y *El Tequeño*, Orlando Montlouis¹⁵, de las inmediaciones del ambulatorio Carmen Rendiles porque estaba grabando una jornada de vacunación del municipio Carrizal, estado Miranda. “No me hicieron borrar nada, no me revisaron el teléfono; solo lo que tenía en la cámara y después de un rato que estuvieron conversando conmigo, me soltaron. Yo seguí

DOCUMENTO

documentando todo el proceso, pero tenía la vigilancia encima”, detalló Montlouis a Espacio Público.

- Efectivos de seguridad intimidaron a la periodista de *Impacto Venezuela*, Mildred Manrique¹⁶, en su residencia ubicada en la urbanización Altamira, Caracas. Los funcionarios tocaron la puerta de su casa sin una orden de allanamiento. “Estoy dentro de mi casa con mi mamá y mi hermana de condición especial. Los policías después de darle golpes a la puerta de mi casa no les abrí. Hay una unidad con 10 funcionarios a dos edificios del mío”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter. Tras la denuncia, los funcionarios de seguridad abandonaron el lugar.
- El 21 de noviembre, la coordinadora del centro de votación Federico Carmona, mantuvo a cincuenta metros del recinto a los periodistas de los medios *Promar, Somos, Latina, El Impulso, El Informador, La Prensa, Crónica Uno, Venezolanos por la Información, El Pitazo, Televen y TV Venezuela*¹⁷. Esto evitó que accedieran al lugar, captaran material audiovisual y entrevistaran a las personas presentes. La corresponsal de *Crónica Uno* del estado Lara, Yelitza Figueroa, explicó a Espacio Público: “no nos permitieron el acceso a ese centro de votación y la coordinadora nos dijo que teníamos un perímetro de 50 metros de la puerta del centro de votación para poder trabajar, lo cual es ilógico, el Plan República nos había dicho que si teníamos el permiso”.

Los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, siendo responsables de al menos 85 casos, cada uno. Con relación a los cuerpos de seguridad, los organismos que acumulan mayor cantidad de casos son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 37 y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con ocho casos cada uno.

En cuanto a las Instituciones del Estado, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue responsable de dieciocho casos, al igual que la

CUADRO 5.
VICTIMARIOS POR OCUPACIÓN

VICTIMARIOS POR OCUPACIÓN	TOTAL	%
Cuerpo de seguridad	85	29,82
Instituciones del Estado	85	29,82
Funcionario (a)	51	17,67
Desconocido	20	7,02
Atacantes informáticos	15	5,26
Operadora privada	10	3,51
Medio de comunicación	8	2,81
Simpatizantes del oficialismo	5	1,75
Particular	4	1,40
Grupos violentos	2	0,70
Total general	285	100

Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Mientras que en el tercer lugar se ubica la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con quince casos.

Al menos el 42 % de los casos registrados durante el 2021 ocurrieron en Internet, comprendieron así, no solo los bloqueos y restricciones impuestas a medios y plataformas digitales por instituciones como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sino también las fallas del servicio eléctrico y de Internet; a esto se suman las amenazas de funcionarios del Estado hacia periodistas y medios a través de redes sociales y las detenciones por la difusión de opiniones o informaciones en línea.

En el plano geográfico, la región con más casos fue el Distrito Capital. El volumen de situaciones registradas en esta entidad responde, entre otras cosas, a que esta es la sede de los Poderes Públicos, y gran parte de la agenda noticiosa se desarrolla en la ciudad capital, lo que trae consigo restricciones y limitaciones al ejercicio de la labor periodística por parte de cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios. La lista la complementan los estados Mérida, Miranda, Bolívar y Lara.

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etcétera); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público es una organización no gubernamental venezolana dedicada desde 2002 a la documentación y acompañamiento de casos de censura, violación al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información oficial en Venezuela.

Nota: Este informe se publicó originalmente en febrero de 2022.

Notas

- 1 Human Right Watch. Informe mundial 2022. Venezuela. Disponible en <https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380706>
- 2 Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones.
- 3 Espacio Público, 21 de noviembre de 2021. 21N: Plan República niega el acceso a los medios. Recuperado en <https://espaciopublico.org/21n-plan-republica-niega-el-acceso-a-los-medios/>
- 4 En 2020 se registraron 965 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.
- 5 Instalaciones destinadas para la venta de combustible.
- 6 Espacio Público, 30 de mayo. Funcionario de la GNB intimidó a reporteros en el estado Zulia. Recuperado en <http://espaciopublico.org/funcionario-de-la-gnb-intimido-a-reporteros-en-el-estado-zulia/>
- 7 Espacio Público, 28 de junio de 2021. Directora del Hospital Pérez de León hostiga y amenaza a reportero de Caraota Digital. Recuperado en <http://espaciopublico.org/directora-del-hospital-perez-de-leon-hostiga-y-amenaza-a-reportero-de-caraota-digital/>
- 8 Espacio Público, 21 de noviembre de 2021. 21N: Plan República niega el acceso a los medios. Recuperado en <https://espaciopublico.org/21n-plan-republica-niega-el-acceso-a-los-medios/>
- 9 Al menos 110 personas fueron detenidas en el año 2020.
- 10 Espacio Público, 3 de julio de 2021. Dictan privativa de libertad al director de Fundaredes, Javier Tarazona, y a dos activistas de la organización. Recuperado en <http://espaciopublico.org/dictan-privativa-de-libertad-al-director-de-fundaredes-javier-tarazona-y-a-dos-activistas-de-la-organizacion/>
- 11 Espacio Público, 14 de noviembre de 2021. Por volar un dron detienen a fotógrafo en el estado Falcón. Recuperado en <https://espaciopublico.org/por-volar-un-dron-detienen-a-fotografo-en-el-estado-falcon/>
- 12 Espacio Público, 8 de enero de 2021. Comisión mixta de Conatel y Seniat incautó los equipos de VPITV. Recuperado en <http://espaciopublico.org/comision-mixta-de-conatel-y-seniat-incauto-los-equipo-de-vpity/>
- 13 Espacio Público, 4 de junio de 2021. Apagones afectan programación de emisoras en Mérida. Recuperado en <http://espaciopublico.org/apagones-afectan-programacion-de-emisoras-en-merida/>
- 14 Espacio Público, 5 de octubre de 2021. Apagones limitan acceso a Internet en el estado Apure. Recuperado en <https://espaciopublico.org/apagones-limitan-acceso-a-internet-en-el-estado-apure/>
- 15 Espacio Público, 31 de mayo de 2021. Intimidación al reportero Orlando Montlouis durante cobertura de vacunación. Recuperado en <http://espaciopublico.org/intimidacion-al-reportero-orlando-montlouis-durante-cobertura-de-vacunacion/>
- 16 Espacio Público, 13 de julio de 2021. Efectivos de seguridad intimidan a la periodista Mildred Manrique. Recuperado en <http://espaciopublico.org/efectivos-de-seguridad-intimidacion-a-la-periodista-mildred-manrique/>
- 17 Espacio Público, 21 de noviembre de 2021. 21N: Plan República niega el acceso a los medios. Recuperado en <https://espaciopublico.org/21n-plan-republica-niega-el-acceso-a-los-medios/>